

Doctora

FLOR ANGELA SILVA FAJARDO

JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE FLORENCIA (CAQUETÁ)

DESPACHO.

REF. : CONTESTACIÓN DEMANDA

PROCESO : 2022 – 00404-00

ACTOR : YORLYNG ESTEFANY CASTAÑEDA TEJADA

ACCIÓN : REPARACIÓN DIRECTA

ELIANA PATRICIA HERMIDA SERRATO, mayor, vecina de esta ciudad, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la **NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL**, de conformidad con el poder que se aporta junto con este escrito de contestación, encontrándome dentro de los términos de Ley me permito **CONTESTAR LA DEMANDA** en los siguientes términos:

DOMICILIO

La demandada y su representante legal tienen su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., Avenida El Dorado con Carrera 52 C.A.N. y la suscrita apoderada judicial de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, tiene su domicilio en la ciudad de Florencia (Caquetá), en la Décima Segunda Brigada, Oficina de Asuntos Legales, correo electrónico Notificaciones.florencia@mindefensa.gov.co.

A LAS PRETENSIONES

1. Esta pretensión no tiene vocación de prosperidad, además de los argumentos que más adelante expongo, y en razón a que las pruebas que se han sido aportadas y pedidas por las partes, hacen que no sea procedente imputarle responsabilidad alguna a la entidad que represento, es decir, que en el presente asunto no se configura régimen de responsabilidad alguna en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con ocasión a los hechos acaecidos el pasado 27 de septiembre de 2020.

2 y 3. De no ser procedente la imputación de régimen de responsabilidad alguna en contra de la entidad que represento, de conformidad con las pruebas y los

argumentos que en el transcurso de esta contestación se plasmarán, tampoco es viable se condene a la demandada a reconocer y pagar a los actores suma alguna por concepto de perjuicios materiales e inmateriales, por cuanto las pruebas no dejan determinar con claridad daño antijurídico alguno con ocasión a los hechos que se debaten en esta Litis y menos aún se observa responsabilidad de la demanda la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército nacional.

4.4. Tal como ha sido reiterado, al no encontrarse responsabilidad alguna en contra de la entidad que represento, en consecuencia no es posible solicitar el cumplimiento de sentencia condenatorio alguna en contra de la entidad, a la actualización de suma alguna, y menos al el pago de interés alguno, por parte de la Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional.

4.5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 188 CPACA y atendiendo a la remisión contemplada en el artículo 306 de la misma normativa, comoquiera que la parte demandada no probó en el curso del proceso la causación de gasto alguno, el Despacho debe abstiene de la condena en costas, en aplicación de lo prescrito en el numeral 8o del artículo 365 del CGP.

OPOSICIÓN A LOS HECHOS

De las indicaciones realizadas por la parte actora en estos numerales, es del caso indicar que las mismas deben de ser probados de tal manera que no quede asomo de duda en sus afirmaciones.

No se encuentra prueba dentro del expediente que acredite las afirmaciones hechas por el apoderado de los actores, con la cual se pueda observar algún tipo de responsabilidad de mi representada la Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional, ya que no existe material probatoria que demuestre que dicha entidad efectivamente hubiese omitido protección en estos hechos, por el contrario tal como ha sido narrado en los hechos de la demanda, se observa que la entidad siempre estuvo atenta prestar la colaboración necesaria y la requerida a fin de contrarrestar las amenazas por cuanta de grupos al margen de la ley, lo que hace que se genere una ausencia de mi representada en estos hechos, por el contrario si está plenamente demostrado que estos hechos son atribuibles a un tercero, como son los grupos al margen de la ley.

En este punto, y dados los argumentos antes esgrimidos, es pertinente indicar que los hechos que se debaten, dados los argumentos dados por el apoderado de los

actores y del lugar donde se configuró el daño, entendida como una zona de confluencia guerrillera, es pertinente indicar que estos hechos son atribuibles al **HECHO DE UN TERCERO**, dada las circunstancias en que se desarrollaron los hechos.

Con relación al hecho de un tercero, tal como se dijo anteriormente, dentro del proceso contencioso no se ha probado por parte de los actores que exista responsabilidad de mi representado la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por los hechos generadores de la presente demanda, ya por acción o por omisión, lo que se tiene probado es que se causó un perjuicio y que este perjuicio lo causó un tercero ajeno a la institución. Por lo tanto al no existir imputación no puede haber reparación, lo cual constituye el elemento necesario, la existencia del nexo causal entre la actividad (lícita o no) o la omisión de las autoridades públicas (art. 90 de la C.P.) y el daño antijurídico que se reclama, de modo tal que éste sea efecto de aquellas que serán su causa.

Además de lo anterior, tal como se dijo anteriormente, dentro del proceso contencioso no se ha probado por parte de los actores que exista responsabilidad de mi representada la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por los hechos generadores de la presente demanda, ya por acción o por omisión. Por lo tanto al no existir imputación no puede haber reparación, lo cual constituye el elemento necesario, la existencia del nexo causal entre la actividad (lícita o no) o la omisión de las autoridades públicas (art. 90 de la C.P.) y el daño antijurídico que se reclama, de modo tal que éste sea efecto de aquellas que serán su causa.

Por todo lo anterior respetuosamente solicito exonerar a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

ARGUMENTOS DE DEFENSA

No es procedente atribuirle ningún título de responsabilidad alguno a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, puesto que las prueba obrantes en el expediente demuestran totalmente lo contrario a lo manifestado por el apoderado de los actores.

De otro lado, es claro que para poder atribuirle responsabilidad a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional deben presentarse indiscutiblemente los tres elementos constitutivos de esta, al igual que establecer cuáles son los eximentes de responsabilidad a saber:

- A) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia. la falta o la falla que se trata no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración.
- B) Lo anterior implica que la administración ha actuado o ha dejado de actuar, por lo que se concluye los actos ajenos del agente ajenos al servicio, ejecutados como simples ciudadanos
- C) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc. con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable como de que sea cierto, determinado o determinable, etc.
- D) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aun demostrada la falta o falla del servicio no habrá lugar a la indemnización.

Además, jurisprudencialmente se ha dicho que bajo cualquier clase o régimen patrimonial de Estado o de las personas jurídicas de derecho público es menester que esté presente estos elementos: la acción o la omisión de la entidad Estatal, el daño antijurídico, el nexo causalidad material y el título jurídico de imputación (CONSEJO DE ESTADO Sentencia del 28 de octubre de 1976 reiterada en sentencia del 08 de mayo de 1995 Ex 8118 MP, Dr. JUAN DE DIOS MONTES HERNÁNDEZ).

Considero de conformidad al acervo probatorio arrojado a este traslado que:

1. No existió falla del servicio por parte del Ejército Nacional.
2. Las pruebas en las cuales se basa la demandante no se han demostrado aun para que se configure una reparación, por tal razón a la fecha carecen de total validez.-

En este punto, y dados los argumentos antes esgrimidos, es pertinente indicar que los hechos que se debaten, dados los argumentos dados por el apoderado de los actores y del lugar donde se configuró el daño, entendida como una zona de confluencia guerrillera, como bien ha sido indicado por la parte actora en el acápite de los hechos de esta demanda, por lo que es pertinente indicar que estos hechos

son atribuibles al **HECHO DE UN TERCERO**, dada las circunstancias en que se desarrollaron los hechos.

Con relación al hecho de un tercero, tal como se dijo anteriormente, dentro del proceso contencioso no se ha probado por parte de los actores que exista responsabilidad de mi representado la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por los hechos generadores de la presente demanda, ya por acción o por omisión, lo que se tiene probado es que se causó un perjuicio y que este perjuicio lo causó un tercero ajeno a la institución. Por lo tanto al no existir imputación no puede haber reparación, lo cual constituye el elemento necesario, la existencia del nexo causal entre la actividad (lícita o no) o la omisión de las autoridades públicas (art. 90 de la C.P.) y el daño antijurídico que se reclama, de modo tal que éste sea efecto de aquellas que serán su causa.

Además de lo anterior, tal como se dijo anteriormente, dentro del proceso contencioso no se ha probado por parte de los actores que exista responsabilidad de mi representada la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por los hechos generadores de la presente demanda, ya por acción o por omisión. Por lo tanto al no existir imputación no puede haber reparación, lo cual constituye el elemento necesario, la existencia del nexo causal entre la actividad (lícita o no) o la omisión de las autoridades públicas (art. 90 de la C.P.) y el daño antijurídico que se reclama, de modo tal que éste sea efecto de aquellas que serán su causa.

DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL DE LAS FUERZAS MILITARES

No corresponde a esta fuerza armada dar seguridad individualizada a los particulares, en tanto que no es esa su misión constitucional, proscrita por la Constitución Nacional en su artículo 217, que reza:

“La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, por ende su fin primordial no es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de manera individualizada ni proporcionar seguridad o protección particular a las personas residentes en Colombia"*

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, por ende su fin primordial no es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de manera individualizada ni proporcionar seguridad o protección particular a las personas residentes en Colombia.

En sentencia del Honorable Consejo de Estado Sección. 3ª Exp. 1997 - 10229, esta corporación indicó:

“el Ministerio de Defensa Nacional tiene como función genérica la "Dirección de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de acuerdo con la Constitución y la ley.

Las fuerzas militares son aquellas organizaciones instruidas y disciplinadas conforme a la técnica militar y constitucionalmente destinadas a la defensa de la soberanía nacional y de las instituciones patrias y están constituidas por “el ejército, la armada y la fuerza aérea y la policía es un servicio público a cargo del Estado, encaminado a mantener y garantizar el orden público interno de la Nación, el libre ejercicio de las libertades públicas y la convivencia pacífica de todos los habitantes del territorio nacional.

Debe tenerse en cuenta entonces, que el Ministerio de Defensa Nacional cumple funciones generales de dirección y orientación relativas a la defensa de la soberanía nacional y de las instituciones patrias y del orden público interno de la Nación.-

Por todo lo anterior respetuosamente solicito exonerar a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

DE LA ACTIVIDAD DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA FALLA DEL SERVICIO

En relación con el artículo 2º de la Carta Política y demás normas constitucionales y legales que asignan la obligación de protección a los residentes en Colombia, hay que decir que su contenido obligacional es DE MEDIO Y NO DE RESULTADO, el Honorable Consejo de Estado ha considerado: "En consonancia con la orientación jurídica que se deja expuesta, la Sala reitera la pauta jurisprudencial que fijó en sentencia del 18 de diciembre de 1997, con ponencia de quien elabora este proyecto, expediente 12942, Actor Mirna Luz Catalán Barilio y otro, en la cual se dijo:

"Es verdad que a la luz de lo dispuesto en la Constitución la fuerza pública, está instituida para salvaguardar las condiciones necesarias del ejercicio de libertades públicas y para asegurar la convivencia pacífica de los colombianos. Sin embargo, este deber constitucional no reviste un carácter absoluto, porque si bien es incuestionable que la Policía Nacional debe velar por la seguridad de los ciudadanos, esta obligación debe cumplirse de acuerdo a los medios a su alcance, ya que resultaría prácticamente imposible de que dispusiera de un policía para cada ciudadano colombiano". (subrayado fuera de texto) 4

Al respecto el Honorable Consejo de Estado - Sección Tercera, en sentencia de fecha mayo 8 de 1998. Exped. Rad. 11837. M.P. Dr. Jesús María Carrillo, manifestó:

“El mandato que impone la Carta Política al Estado en el artículo 2o inc. 2o., a las autoridades de la República en el que establece que “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc, para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera.

El tema tratado no es nuevo para la Sala, pues ha tenido la oportunidad de pronunciarse en sentencia de agosto 5 de 1994, exp. 8485, con ponencia del Doctor Carlos Betancur Jaramillo, en la que se dijo:

“ 1. En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la administración por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus obligaciones, la determinación de si el daño causado al particular tiene el carácter de daño antijurídico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue inadecuada. Si el daño que se imputa a ésta se deriva del incumplimiento de un deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la antijuridicidad del daño surgirá entonces aquí de dicha conducta inadecuada, o lo que es lo mismo una FALLA EN EL SERVICIO.

“La noción de la falla del servicio no desaparece, como lo ha señalado la Sala, que la responsabilidad estatal fundada en el citado artículo 90 de la Carta. Cuando de ella se derive la responsabilidad que se imputa a la administración, se constituye en un elemento que debe ser acreditado por el demandante. Así, lo ha repetido esta misma Sala: “En otros términos, el daño es antijurídico no solo cuando la administración que lo causa actúa irregularmente, sino cuando esa conducta lesiva esté ajustada al ordenamiento.

“Pero decir antijurídico no quiere significar que la noción de falta o falla del servicio desapareció de la responsabilidad estatal y menos que el acreedor de la indemnización ya no tenga que probar la falla si la hubo o la conducta irregular que lo lesionó.

“En otras palabras, cuando se alega que la conducta irregular de la administración produjo el daño (la falla del servicio en el lenguaje corriente) tendrá que probarse esa irregularidad, salvedad hecha de los eventos en que esa falla se presume. En ambas hipótesis ese primer presupuesto de la responsabilidad deberá gobernarse por las reglas de la carga probatoria. Y cuando se afirma que ese daño se produjo sin falta o falla de la administración pero el que lo sufre no tenía por qué soportarlo, el acreedor, como es apenas lógico, deberá demostrar el daño y el por qué, pese a ser legal la actuación de la administración, no tenía por qué sufrirlo.

“En síntesis, la nueva Constitución a pesar de su amplitud en materia de responsabilidad, no la hizo exclusivamente objetiva ni borró del ordenamiento la responsabilidad por falla del servicio. Las nociones de imputabilidad y de daño antijurídico así lo dan a entender (Sentencia del 25 de febrero de 1993, Ponente, Carlos Betancur Jaramillo)”.

“2. Para determinar si aquí se presentó o no dicha falla del servicio, debe entonces previamente establecerse cual es el alcance de la obligación legal incumplida o cumplida inadecuadamente por la administración. Debe precisarse en qué forma debió haber cumplido el Estado con su obligación, que era lo que a ella podía exigírsele, y, solo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se establece que no obró adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una administración diligente, su omisión podrá considerarse como causa del daño cuya reparación se pretende.

“La falla de la administración, para que pueda considerarse entonces verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debía prestarse el servicio, la conducta de la administración pueda considerarse como “anormalmente deficiente”.

“No se trata entonces de determinar si el Estado tiene o no recursos para cubrir condenas, como lo afirma el recurrente. Se trata de establecer si, teniendo en cuenta la realidad concreta en la cual se presta un determinado servicio, puede considerarse que dicho servicio fue inadecuadamente prestado y dicha circunstancia así puede considerarse como la causa del daño sufrido por el demandante.

“La Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el carácter de relativo que presenta la falla del servicio y ha señalado que para hablar de ella hay que tener en cuenta la realidad misma, el desarrollo, la amplitud y la cobertura de los servicios públicos y que ella no puede tener la misma extensión en un país desarrollado, que en uno como el nuestro que apenas está en vía de desarrollo.”.

“Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes que a partir de este texto se fundamenta la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes, pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como si hubieren sucedido los hechos así como a los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que “nadie es obligado a lo imposible” (Sentencia del 11 de octubre de 1990)”. (Gaceta Jurisprudencial No. 19, septiembre de 1994, Edit. Leyer, págs. 75 -76).

(...)

Para la Sala es preciso recordar respecto a lo señalado anteriormente que la presencia del Estado para el cumplimiento de su misión debe tenerse presentes, no sólo las declaraciones y mandatos constitucionales sino también las

circunstancias y realidades propias de la Nación.

El principal deber del Estado consiste en proteger la vida de los asociados y para su cabal desenvolvimiento, también la integridad personal y patrimonial de los mismos, todo lo cual asegura o permite el goce de la libertad dentro del orden jurídico.

Naturalmente, el ciudadano que es y debe ser el primer beneficiario de la organización social y política de la Nación, tiene un deber básico, cual es el de no sólo respetar la ley y acogerse a ella y a las autoridades, sino muy particularmente el de velar por su seguridad e integridad, pues no es aceptable que se exponga inútilmente, o deje expósitos sus bienes so pretexto de reclamar del Estado su derecho a una protección absoluta.

De otro lado conviene precisar respecto de la presencia del Estado que ella se manifiesta en diversos niveles de protección, tales como la prevención mediante actividades de control y para el caso de las Fuerzas Militares o de Policía, o las de carácter investigativo, cumplen este encargo con sus patrullajes, planes operativos y búsqueda de información todo lo cual permita disuadir o impedir el delito en cualquiera de sus formas. Cuando la prevención no es suficiente, es deber del Estado emplear legítimamente la fuerza pública para contener e impedir que prosiga la violación de los derechos de los asociados.”

Por todo lo anterior respetuosamente solicito exonerar a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.

EXCEPCIÓN PREVIA

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

Las Fuerzas Militares son ajenas a los hechos que motivan el proceso en curso y teniendo en cuenta lo aquí planteado, estimo que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional en cabeza del Ejército Nacional, no es sujeto pasivo de esta Acción Contenciosa Administrativa, por lo que le solicito se exonere de toda responsabilidad, teniendo en cuenta que las pruebas demuestran que no es procedente atribuir responsabilidad alguna en contra de la entidad que represento, lo que hace que se configure el eximente de responsabilidad denominado **HECHO DE UN TERCERO**, y ante la falta de imputación frente al daño antijurídico al estar demostrado que el causante de los perjuicios no es la entidad que represento.

PRUEBAS

1. De conformidad con lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 175 del C.P.A y de lo C.A., me permito aportar oficios No. 27-23 fechado del 08 de junio de 2023, de los cuales no se ha dado respuesta a lo solicitado a la fecha de presentación de este escrito de contestación de la demanda; sin embargo se advierte que una vez se dé respuesta a dichos oficios se aportara a este expediente en su oportunidad.
2. En caso de no darse respuesta a los anteriores oficios, solicito al señor Juez se sirva requerir de manera oficiosa dichas pruebas en los términos del oficio que se adjunta.

Me acojo a la viabilidad que puedan ofrecer las pruebas allegadas y solicitadas dentro del presente medio de control, además de las decretadas por el Despacho, en relación con lo acusado y que guarden relación con los argumentos de defensa del Ministerio de Defensa Nacional.

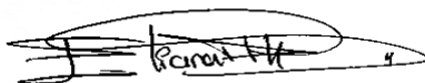
NOTIFICACIONES

El señor Ministro de Defensa Nacional, las recibirá en la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, ubicada en la Avenida El Dorado con Carrera 52 C.A.N., de la ciudad de Bogotá D.C., la suscrita apoderada las recibirá en la Secretaría de su Despacho, o en la Oficina de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional ubicada en las instalaciones de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional con sede en Florencia (Caquetá).

PERSONERÍA

Respetuosamente solicito el reconocimiento de personería en los términos del poder que me ha sido conferido.

Atentamente,



ELIANA PATRICIA HERMIDA SERRATO

C.C. No. 40.611.849 Florencia C.

T.P. No. 184525 del C. S de la J.